

John Brown

Crisis de la democracia de mercado y las respuestas populistas: el caso de Evo Morales de Bolivia

Los movimientos populistas surgen como respuestas a las crisis de representación por las cuales las élites son incapaces / se niegan a responder a las quejas de las personas (Arditi 2005: 56). El populismo puede entonces ser entendido como una característica habitual de la política que representa un desafío subversivo al statu quo y como un punto de partida para la reconstrucción de un nuevo orden cuando el anterior ha perdido legitimidad (Laclau 2005: 177). En efecto, el populismo puede entenderse como parte de un proceso de transformación social, un movimiento protector de la sociedad en respuesta a la expansión excesiva del libre mercado (Polanyi 2000).

Cuando los intereses de los sectores más ricos de la sociedad se organizan en política, mientras que las cuestiones relativas a las clases populares son descartadas, la democracia pierde legitimidad. Cuando las diferencias entre los partidos de izquierda y derecha se estrechan, la indiferencia popular y la desconfianza hacia los partidos y las instituciones aumentan (Mair 2013). La desconfianza en el sistema político junto con la abstinencia de participación abre espacio a los movimientos de oposición (Schmitter 2019: 152). A medida que los partidos / políticos se separan de sus bases sociales tradicionales y que la desigualdad y la precariedad socioeconómica se afianzan, la democracia es vista por los sectores marginados como una fachada para proteger los privilegios de las élites. Apelando a un sentido de peligro personal y a un sentido colectivo de exclusión política, los populistas pueden considerar que la clase política ha fracasado, y que seguirá fracasando, hasta que efectivamente los ciudadanos prescindan de cualquier perspectiva realista de una vida mejor (Dunn, 2019: 56).

Tal descomposición de la legitimidad del modelo democrático imperante ocurrió en varios estados latinoamericanos al final del milenio. Los candidatos “outsiders” antisistema surgieron

cuando los partidos laborista y de centroizquierda estaban a la vanguardia de las políticas neoliberales, una configuración hallada en Bolivia, Ecuador y Venezuela (Roberts 2015). La adopción de políticas neoliberales por parte de los partidos de centroizquierda hizo que los sistemas de partidos convergieran en torno a variantes de la ortodoxia económica, desalineando programáticamente la competencia partidista y canalizando la oposición social hacia formas extra-sistémicas de protesta social y electoral, abriendo así un espacio político para los “outsiders” en el flanco izquierdo de los partidos dominantes.

Los partidos tradicionales “fueron percibidos como instrumentos de las élites locales y extranjeras que implementaron políticas neoliberales y, por ende, aumentaron la desigualdad social” (De la Torre, 2016: 64). A medida que la satisfacción con una democracia excluyente (política y económicamente) se desplomaba, surgieron olas de movilización antineoliberal. Las protestas representaron la lucha por la reincorporación a través de la cual los sectores excluidos de la sociedad esperaban (re)conectarse con las instituciones estatales para obtener acceso a los derechos que el estado no les proporcionaba (Rossi y Silva 2018). Los líderes populistas diagnosticaron las preocupaciones de varios grupos como una falta de ciudadanía democrática que la democracia basada en el neoliberalismo les negó (Silva 2009), grupos como las mujeres, los afrolatinos, los grupos indígenas, los grupos populares urbanos y rurales, los trabajadores informales y los campesinos sin tierra, entre otros. La naturaleza populista de los “outsiders” de América Latina se basa en el desafío a las élites político-económicas cuyo estatus interno se basa en la exclusión de otros sectores de la comunidad nacional (Roberts 2019). El populismo en los Andes debe entenderse entonces como la respuesta a una *crisis de muy poca democracia* (Brown 2020, 2022) con bloques populares y líderes populistas que desafían el statu quo de la inclusión de un bloque de élite minoritario y la exclusión política y socioeconómica de la mayoría.

Como era de esperar, dichos contrincantes populistas provocaron una intensa resistencia contra aquellos sectores de la sociedad que habían liderado y se habían beneficiado del modelo de mercado. Los gobiernos de izquierda no solo se enfrentaban a los bloques de oposición que exigían

una ortodoxia a favor del libre mercado y una protección de la distribución del poder político/económico preexistente, sino que también se enfrentaban a la presión de los sectores populares organizados a través de movimientos sociales / sindicatos / organizaciones vecinales para una mayor participación y mejores condiciones de vida.

Es al entender la naturaleza de estas diversas y cambiantes luchas de poder que uno puede comprender los avances y limitaciones de los procesos de reforma. Además, el hecho de analizar el desempeño populista a través de una lente de poder relativa ayuda a arrojar una luz sobre las realidades del populismo que existe en la actualidad, un populismo en el que los procesos pueden conllevar simultáneamente características democratizadoras y desdemocratizadoras.

Los académicos de tradición liberal describen cómo líderes populistas como Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa amenazaron la democracia al desafiar las normas liberales. Por ejemplo, Weyland (2013) describe las formas en las que estos líderes erosionaron los controles y equilibrios institucionales y marginaron a la oposición a través del "legalismo discriminatorio". Levitsky y Loxton (2013) describen estos casos como "autoritarios competitivos" en los que las instituciones democráticas existen y se utilizan como las principales rutas hacia el poder, pero los funcionarios luego abusan de los poderes estatales para sesgar la competencia electoral a su favor a tal punto que la capacidad de competencia de la oposición se ve seriamente comprometida. Se dice que los líderes, en dichos casos, dependen de la "retórica populista" para erigir su hegemonía política, haciendo caso omiso a las normas democráticas al aumentar el poder del ejecutivo.

Mientras que los académicos liberales condenan la naturaleza "híper-presidencial" de los casos de izquierda "radical", los "outsiders" antisistema en los Andes enfatizaron que las arraigadas élites político-económicas bloquearon los programas de cambio y, por lo tanto, abogaron por un presidente fuerte que se basara en "apelaciones plebiscitarias de apoyo popular" para "contrarrestar la tendencia hacia el statu quo" (Munck 2015: 374). Las respuestas populistas iliberales a la democracia de mercado excluyente y dominada por la élite evocan la noción de Slater (2013) de que las democracias se moverán entre las formas oligárquicas y las formas populistas dominantes a

medida que surjan intensos conflictos entre los actores partidistas que desplieguen perspectivas competitivas de responsabilidad democrática. Los populistas pedirán una inclusión más sustancial o una rendición de cuentas vertical, mientras que los opositores defenderán la democracia por las restricciones contra la concentración excesiva de poder irresponsable en el ejecutivo, es decir, la rendición de cuentas horizontal. Tales visiones opuestas son muestras de los potenciales democratizadores y los peligros del populismo. Si bien muchos teóricos condenan al populismo como una amenaza para la democracia liberal, Berman señala que "aunque es cierto que la democracia sin las restricciones del liberalismo puede deslizarse hacia un mayoritarismo excesivo o un populismo opresivo, el liberalismo sin las restricciones de la democracia puede degenerar fácilmente en oligarquía" (Berman 2017: 30). Es útil, por lo tanto, evaluar el impacto de los populistas en la calidad democrática no solo en términos de respeto a las normas liberales, sino también en términos de su éxito o fracaso, de profundizar y extender la calidad democrática al promover la participación y la inclusión sustancial de antiguos grupos excluidos. El resto de este capítulo examina el surgimiento, desarrollo y legado potencial del proceso encabezado por Evo Morales en Bolivia.

La era precedente: La democracia de mercado y la resistencia popular

El Fondo Monetario Internacional (FMI) diseñó una Nueva Política Económica la cual fue implementada bajo decreto por el presidente boliviano Paz Estenssoro (1985-89). Se adoptaron la devaluación monetaria, la libre flotación cambiaria y la liberalización de las tasas de interés. El gasto del sector público disminuyó y se restringieron los préstamos estatales y los subsidios al sector minero y al sector agrícola tradicional. La "imposición de la Nueva Política Económica por 'tratamiento de choque' causó una profunda exclusión política y económica de los sectores populares, amenazando profundamente su subsistencia y dejándolos sin defensas dentro de las instituciones políticas establecidas" (Silva 2009: 109).

Gonzalo Sánchez De Lozada se convirtió en presidente (1993-1997) y adoptó nuevas reformas neoliberales que deterioraron la calidad de la ciudadanía política y socioeconómica de los sectores populares. Una campaña de privatización hizo que la mayoría de las acciones de las empresas

públicas de energía, telecomunicaciones y transporte se transfirieran a corporaciones multinacionales (Trujillo y Spronk 2018: 135). Los resultados de esta privatización fueron la pérdida masiva de empleos, la subcontratación de la mano de obra no sindicalizada, la atomización de los trabajadores a medida que las fábricas fueron reemplazadas por talleres más pequeños y la informalización. Un cambio en la política agrícola fue testigo de cómo las empresas transnacionales y las grandes empresas agrícolas nacionales con sede en los departamentos de *media luna*¹ lideraron una campaña de inserción en la economía global. Los campesinos perdieron tierras, créditos y mercados para sus cultivos, fomentando una urbanización de la mano de obra rural. Las reducciones o eliminaciones de los subsidios a los alimentos básicos, los servicios públicos, el combustible y el transporte empeoraron la exclusión económica de franjas sociales cuyos niveles de pobreza se mantuvieron por encima del 50 por ciento en las zonas urbanas y del 77 por ciento en las zonas rurales.

La creación de políticas fue dominada por los intereses de capital, guiada por agencias supranacionales, y las decisiones se tomaron de manera tecnocrática e irresponsable. El uso excesivo de decretos presidenciales, el escaso debate legislativo y la falta de consideración por los intereses, demandas y prioridades de los grupos sociales subordinados se convirtieron en la norma.

Durante las presidencias de Hugo Banzer (1997-02), de Lozada (2002-03) y Carlos Mesa (2003-05) estallaron olas de protestas cuando éstos adoptaron reformas económicamente excluyentes sin incluir al sector popular en la toma de decisiones. Durante la Guerra del Agua de Cochabamba, una serie de protestas masivas contra el proyecto de privatización del agua en la ciudad, los movimientos de protesta popular comenzaron a forjar vínculos con los partidos políticos, especialmente con el partido Movimiento al Socialismo (MAS) encabezado por Evo Morales. El MAS era un partido de movimiento en el sentido de que se involucraba en políticas electorales y competía por la presidencia, a la vez que se dedicaba a las luchas extraparlamentarias y a la negociación en aras de una agenda programática.

¹ El término "media luna" se refiere a la forma de media luna que tienen las fronteras de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, donde se encuentran los sectores más conservadores de la oposición de élite política y económica.

El MAS utilizó el contexto de la Guerra del Agua para adoptar una estrategia "plural popular" (Albro 2005) de creación de coaliciones, en la que "las cuestiones indígenas se convirtieron en el marco de una articulación política exitosa" (Anria 2013: 27). Morales, a través del MAS, desempeñó un papel clave en la coordinación de múltiples grupos (organizaciones campesinas, cocaleros, sindicatos urbanos y organizaciones vecinales) al enmarcar las quejas específicas de algunos grupos u organizaciones como problemas que surgieron debido a la democracia de mercado de Bolivia.

Luego de la elección de De Lozada en 2002, bajo la dirección del FMI, el gobierno implementó políticas de estabilización económica que incluyeron aumentos en los impuestos sobre la renta y una moratoria en los aumentos salariales del sector público. En octubre de 2003, los residentes de la ciudad de El Alto organizaron enormes manifestaciones cuando se dieron a conocer los planes de De Lozada de otorgar concesiones a las transnacionales para canalizar el gas natural de Bolivia a través de puertos chilenos para exportarlo a los EE. UU. Los "términos de la concesión al capital extranjero, presentados como un regalo, convirtieron el asunto en un símbolo de exclusión del sector popular de la sociedad de mercado" (Silva 2009: 134-5) y las olas de protesta que involucraron a El Alto, y que luego se extendieron por todo el país, se dieron a conocer como la Guerra del Gas de 2003.

El gobierno ordenó al ejército disolver las marchas, lo que resultó en el asesinato de un gran número de civiles por parte de las tropas militares. La represión militar produjo el efecto contrario. Protestas masivas estallaron en todo el país pidiendo la renuncia del presidente, con mineros y manifestantes de Oruro y Potosí, cultivadores de coca del Chapare y campesinos del altiplano convergiendo en La Paz. Surgieron demandas pidiendo la destitución del presidente y su modelo neoliberal, así como la nacionalización del gas. Con un estimado de 500,000 protestantes en las calles,

de Lozada huyó del país para exiliarse en los EE. UU. quedando en el cargo el vicepresidente Carlos Mesa.

Si bien, al principio, Mesa trató de apaciguar a los sectores populares movilizados, las crecientes presiones de las élites económicas y la alianza de las transnacionales, el FMI y la embajada de los EE. UU. en apoyo a las élites nacionales, hicieron que terminara abandonando cualquier pretensión de respaldar las demandas populares (Gustafson 2020: 113; Webber 2010: 54). Las organizaciones populares a nivel local, regional y nacional coordinaron protestas, movilizando a cientos de miles de manifestantes, hasta eficazmente paralizar las ciudades de La Paz y El Alto, con lo que Mesa se vio obligado a renunciar.

Durante la presidencia de Mesa, “Bolivia se caracterizó por una polarización política cada vez más profunda con respecto a los ejes de clase, raza y región” (Webber 2010: 52). Surgieron dos bloques sociales. En primer lugar, un bloque indígena de izquierda constituido predominantemente por fuerzas campesinas y obreros urbanos indígenas. El segundo bloque que se consolidó entre octubre de 2003 y junio de 2005 “fue un bloque burgués-oriental liderado por las burguesías regionales de los departamentos ricos en hidrocarburos que conforman” la media luna” (Ibíd.).

La convergencia en torno a las políticas de ajuste estructural de todos los partidos mayoritarios (incluidos los supuestos partidos de izquierda) y el rompimiento de las promesas de campaña de los funcionarios electos hizo que la ira y las aspiraciones del sector popular se canalizaran hacia formas extra sistémicas de protesta social y electoral. El MAS llenó el vacío creado por el declive de los partidos tradicionales asociados al neoliberalismo. Morales y el MAS ganaron fácilmente las elecciones del 2005 en la primera vuelta, preparando el escenario para nuevas luchas entre los bloques sociales rivales en torno a las nociones contrapuestas de democracia.

La construcción de la democracia post-neoliberal y el proceso de la Asamblea Constituyente (2006-2009)

Tras el colapso del sistema de partidos tradicionales y la deslegitimación del modelo de democracia de mercado, junto con las olas de protestas anti-neoliberales coordinadas por poderosas organizaciones populares, Morales fue elegido presidente con el alcance ideológico y el respaldo popular para promover una democracia post-neoliberal alternativa. Sin embargo, un bloque de la oposición se aferró a la protección del statu quo y a la democracia del mercado. En la esfera política, a pesar de haber ganado las elecciones presidenciales y de tener una mayoría simple en la Cámara de Diputados, el MAS no tenía control ni sobre el senado ni sobre el poder judicial conservador.

Además, los políticos del bloque de la oposición ganaron el control de la mayoría de los gobiernos departamentales, incluyendo las regiones claves de poder económico (las finanzas, la agroindustria y los hidrocarburos). También dominaban las fuentes ideológicas de poder (los medios de comunicación, las iglesias) y ejercían control sobre las turbas fascistas (una forma de poder militar) involucradas en la represión violenta de los partidarios del gobierno.

En junio del 2006, el gobierno presentó el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007 que exigía una profundización y ampliación de la democracia. El plan ofrecía una visión alternativa a la democracia de mercado y exigía el buen vivir, una visión indígena basada en formas comunitarias de convivencia. El plan destacaba que el Estado debía intervenir como “promotor y protagonista del desarrollo nacional”, por lo que el Estado debía tomar medidas para transformar la sociedad y la economía, pero solo si “todos los pueblos y las culturas estaban presentes en las decisiones económicas y políticas del Estado”.

El plan se basó en el desarrollo de dos sectores de la economía. El primer sector englobaba las actividades generadoras de excedentes como los hidrocarburos, la electricidad, la minería y los recursos naturales, y el segundo estaba integrado por sectores generadores de empleo e ingresos como el turismo, la agricultura, la manufactura, el transporte y los servicios. El plan requería que los ingresos generados a través de un mayor control estatal sobre los sectores generadores de excedentes fueran redirigidos hacia la transformación de los sectores generadores de empleo/ingresos a través del gasto estatal y de la redistribución, impulsando la demanda interna y respaldando la igualdad

social. La nacionalización de los sectores de productos básicos también se utilizaría para desarrollar la industrialización de materias primas (Arze 2015).

En mayo del 2006, Morales declaró que el sector de hidrocarburos de Bolivia sería nacionalizado para permitir que el estado aumentara el precio y las rentas de sus exportaciones de gas natural. Mediante el decreto 28701, “el gobierno de Morales recuperó el derecho del Estado a comercializar sus hidrocarburos y aumentó los precios que percibía por la venta de su gas natural” (Kaup 2010: 129). Como se analiza detalladamente a continuación, si bien la “nacionalización” fue en realidad moderada, estos cambios representaron una transformación fundamental en el papel del Estado en el sector de hidrocarburos e incrementaron la capacidad fiscal del gobierno.

Los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) de profundizar las voces del sector popular en la toma de decisiones y ampliar la calidad democrática a través de un mayor control estatal sobre la economía, las políticas sociales redistributivas, también dio indicios de una reforma en la propiedad de tierra que constituyó un desafío directo a los intereses de las élites. En respuesta al PND, las élites de la media luna entablaron una lucha extrainstitucional (a menudo violenta) y legal (a través del apoyo judicial) por la autonomía regional con el respaldo de los medios de comunicación aliados en un intento por evitar los cambios propuestos al estado de derechos de propiedad privada, reforma agraria y redistribución de los ingresos estatales.

Mientras el bloque opositor presionaba al MAS desde la derecha, poderosas organizaciones populares hacían lo propio desde abajo para avanzar en el proceso. Es crucial resaltar que el MAS tenía tanto una coalición social central como un bloque más autónomo de organizaciones del movimiento comprometido en una alianza estratégica. El núcleo estaba compuesto por un “círculo interno” que incluía a los cocaleros y a las Seis Federaciones del Trópico, a la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (CNMCIOMB-BS), y a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). El segundo bloque estratégico incluía al principal sindicato de trabajadores, la Central Obrera Boliviana (COB), los sindicatos del sector público, trabajadores del sector informal urbano organizados en

asociaciones de vecinos denominadas Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) – especialmente la de El Alto, los sindicatos de mineros del sector informal llamados “cooperativistas”, y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas de Qullasuyu (CONAMAQ).

En el forcejeo entre el bloque de oposición y las demandas populares, con el gobierno situado en el medio, el MAS dependía en gran medida de la movilización defensiva de la base popular para evitar el éxito de las tácticas de desestabilización de la élite. El gobierno de Morales que había sido elegido en un mandato anti-neoliberal con un respaldo popular a gran escala y con poderosos movimientos que presionaban al gobierno desde abajo, enfrentaba a un bloque de oposición recalcitrante decidido a bloquear la agenda post-neoliberal, lo que sirvió de justificación al gobierno de Morales para torcer las normas liberales según fuera necesario con miras a debilitar/superar la oposición.

Por ejemplo, para combatir el sesgo conservador en el poder judicial, el MAS presionó a algunos jueces en ejercicio, incluido el presidente de la Corte Suprema, al presentar cargos penales contra ellos. Según Sánchez-Sibony (2021), el gobierno del MAS denunció públicamente al poder judicial, alegando corrupción, y movilizó a sus partidarios para que exigieran la renuncia de los miembros del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema. También hubo frecuentes enfrentamientos con los medios de comunicación tradicionales que estaban vinculados a las familias terratenientes de la élite de la media luna, a quienes Morales calificó como el principal enemigo del proyecto post-neoliberal.

Sin embargo, este comportamiento antiliberal retuvo el apoyo popular, ya que se consideraba parte de la lucha contra un bloque de oposición pro-neoliberal que intentaba frenar los intentos del MAS de adherirse a las promesas electorales de avanzar hacia un modelo post-neoliberal de democracia que profundizara y ampliara la calidad de ciudadanía para los grupos excluidos durante mucho tiempo. Frente a un enemigo común, se desarrolló una relación de tipo aliado entre el partido y la base. En efecto, durante esta primera etapa del proceso post-neoliberal, a través del Pacto de

Unidad², CONALCAM³, el proceso de Asamblea Constituyente, la promulgación de una nueva Constitución y el nombramiento de líderes de movimientos/organizaciones en cargos ministeriales, la calidad democrática para los sectores que habían sido excluidos en la anterior era de democracia de mercado se profundizó y amplió.

En enero del 2009, los votantes aprobaron una nueva Constitución con el 61,4 por ciento de los votos a favor y 38,6 en contra. La Constitución delinea varios mecanismos que buscan profundizar y ampliar la democracia. Adhiriéndose a las exigencias del Pacto de Unidad, la Constitución redefinió la nación como “plurinacional y comunitaria”. La democracia de Bolivia se describe en el artículo 1.1 como “participativa, representativa y comunitaria”. Además de la democracia representativa liberal estándar, los mecanismos de democracia directa y participativa incluyen la ejecución de referéndum, la revocación de servidores públicos por previa consulta y las iniciativas legislativas de los ciudadanos. Asimismo, los miembros del poder judicial, después de la preselección por el legislativo, deben ser elegidos por el pueblo. La sociedad civil organizada debe participar en el diseño de las políticas públicas y ejercer el control social en todos los niveles del Estado. En términos de ampliación de la democracia, la Constitución de 2009 apoya los derechos económicos, sociales y culturales de los grupos desfavorecidos, proclamando el *buen vivir* como objetivo principal. Para lograr dicho objetivo, la Constitución exige la distribución del excedente de la extracción de recursos no renovables a todos los ciudadanos. A pesar de que se forjaron relaciones de tipo aliado entre el MAS y las organizaciones populares, el período 2009-14 sería testigo del surgimiento de tensiones entre partidos y bases. Para comprender por qué, es necesario describir la naturaleza de las relaciones entre el gobierno y las transnacionales después del 2010 y cómo estas dieron forma a la autonomía estatal.

² El Pacto de Unidad fue una coalición de movimientos populares con el fin de, primero que nada, luchar por la formación de una Asamblea Constituyente, y luego de haber iniciado ese proceso, articular y promover los intereses campesinos e indígenas en la asamblea (Zuazo 2010: 129).

³ En respuesta a las tácticas desestabilizadoras del bloque opositor, y a partir del Pacto de Unidad, Morales organizó a sus partidarios, pertenecientes tanto a las esferas más altas como las más bajas, en la Coordinadora Nacional por el Cambio (CONALCAM).

Tensiones en el proceso post-neoliberal (2009-2014)

Antes de la reelección de Morales en el 2009, “la política boliviana se caracterizaba por una fuerte polarización entre la oposición de derecha y el gobierno y sus aliados de izquierda” (Ellner 2013: 17). Sin embargo, con la promulgación de la nueva constitución y la retirada de los antiguos secesionistas hacia los canales institucionales de oposición, el MAS ya no era capaz de reunir la base contra un enemigo común (Fontana 2013). De hecho, después de la derrota de la campaña secesionista, las tensiones entre el partido y la base aumentaron.

Para cumplir con las promesas de impulsar la ciudadanía social, Morales dependía de los ingresos provenientes de los recursos naturales del país. Sin embargo, había heredado industrias extractivas con dependencia de trayectoria que infundían a las Transnacionales altos niveles de poder estructural (Kaup 2010). La empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el sector de hidrocarburos en general habían recibido muy poca inversión desde finales de la década de los 90. Además, la industria gasífera estaba dominada por Petrobras y Repsol, los cuales tenían contratos a largo plazo que les daban acceso a las reservas de hidrocarburos legalmente garantizados por medio de acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales (Kaup 2013).

En ese marco en el que Morales fue electo, bajo la promesa de eliminar los peores excesos de la exclusión económica, la economía boliviana estaba subdesarrollada y dependía de las exportaciones de materias primas, la empresa estatal de extracción carecía de fondos suficientes y estaba obsoleta, y las empresas extractivas transnacionales estaban arraigadas de forma contractual e infraestructural en la economía y tenían la capacidad extractiva y el capital para invertir en nuevas exploraciones, Morales no podía impulsar la nacionalización total (Kaup 2010: 135). Sin embargo, se incrementaron los impuestos y las regalías a las empresas transnacionales, lo que incrementó los ingresos estatales provenientes de las exportaciones de gas de US\$ 673 millones en el 2005 a más de US\$ 5 mil millones en el 2013. La YPFB extendió su rol, tanto operativo como auditor, al mismo tiempo que tuvo una mayor voz en la decisión del destino de las inversiones (Paz y Ramírez-Cendero

2021: 138, 144). A pesar de estos avances, el estado solo buscaba recuperar el control de los activos previamente capitalizados, y que las empresas en control de tales activos obtuvieran un pequeño porcentaje del gas de Bolivia (Kaup 2010). Por consiguiente, la mayor parte de la cadena de valor de los hidrocarburos no fue nacionalizada.

El gasto público, respaldado por un auge de las materias primas y el aumento de los impuestos y las regalías sobre las exportaciones de hidrocarburos, aumentó en un 500 por ciento entre el 2006 y el 2013 (Arteaga 2015). Hubo importantes inversiones en las áreas de la educación y la salud. Remesas como el Bono Juancito Pinto, cuyo objetivo era incentivar la asistencia escolar, benefició a 1,8 millones de niños. Toda la población tenía derecho a la Renta Dignidad, una pensión por vejez, y al Bono Juana Azurduy destinado a reducir las tasas de mortalidad materno-infantil y la desnutrición infantil crónica. Desde 1999 hasta el año 2011, el ingreso promedio aumentó un 45 por ciento y un 182 por ciento entre las zonas rurales (Ibíd.). El salario mínimo real aumentó un 87,7 por ciento entre 2005 y 2014 (Johnson y Lefebvre 2014). La desigualdad disminuyó, y los ingresos de los sectores más pobres de la población crecieron mucho más rápido desde el 2006 que el de los hogares con mayores ingresos. Entre el 2005 y el 2011, la pobreza se redujo de 59,6 a 45 por ciento, y la pobreza extrema se redujo de 36,7 a 20,9 por ciento (Ibíd.).

A pesar del evidente cambio hacia un modelo post-neoliberal de desarrollo y democracia y de que Morales y el MAS presentaron su proyecto como una alternativa radical al neoliberalismo que implicaba la diversificación de la economía lejos del desarrollo primario basado en la exportación y acompañado de la nacionalización de los recursos naturales de Bolivia, ninguno de estos objetivos se alcanzaría plenamente. Bolivia se volvió más dependiente que antes de las exportaciones primarias, y los productos primarios aumentaron de 89 por ciento del valor total de exportación en el 2005 al 95 por ciento en 2012 (CEPAL 2013: 111). Los hidrocarburos como porcentaje del valor total de las exportaciones aumentaron de 35 por ciento antes de la primera elección de Morales a 51 por ciento en el período 2011-14 (Arze 2016). Además, PETROBRAS y REPSOL, dos empresas transnacionales, mantuvieron el control de más del 75 por ciento de la producción de gas natural.

Tal compromiso, por un lado, permitía que Morales gobernara y, por el otro, restringía el espacio para una agenda más radical. A pesar del apoyo del sector popular al proyecto de democratización sustantiva radical, la moderación del proyecto frente al poder estructural de la oposición económica desencadenó una recalibración de las relaciones entre partidos y bases.

Los líderes de las organizaciones pertenecientes al núcleo original del MAS tenían más acceso a los ministerios que las organizaciones no centrales que apoyaban estratégicamente y se aliaban con el MAS. Las opciones de candidatos del MAS para ocupar puestos representativos en la legislatura provenientes de las organizaciones centrales eran aceptadas con mayor frecuencia, y sus voces tenían más peso en los espacios participativos como CONALCAM. Para las organizaciones estratégicas, sin embargo, el proyecto post-neoliberal contenía elementos regresivos de intromisión desde arriba. Aquellas organizaciones que intentaron desafiar el plan de desarrollo del MAS, ya sea porque lo consideraban demasiado moderado y cedía demasiado terreno a las élites económicas nacionales y transnacionales, o porque dependía de una continua invasión de las tierras indígenas, se enfrentaron a un entorno cada vez más hostil. Los líderes del MAS buscaron debilitar a las organizaciones contestatarias usando la estrategia de divide y vencerás. También trataron de asegurar un entorno de paz gubernamental incorporando líderes militantes a la estructura del partido. Los líderes de las organizaciones cooptadas debían mostrar lealtad política si deseaban recibir una parte de los fondos públicos necesarios para responder a las demandas de su base (Tapia 2011; Lazar 2008).

Junto con la cooptación, el MAS fomentó el paralelismo, es decir, la creación de organizaciones paralelas a las organizaciones contestatarias existentes. Se identificaron y financiaron facciones de líderes de organizaciones populares que apoyaban al MAS y se abstendían de participar en movilizaciones contestatarias contra las políticas del MAS, mientras que las facciones más críticas fueron marginadas. Cuando surgían enfrentamientos entre los aliados centrales, el gobierno los definía como “tensiones creativas”, pero cuando las movilizaciones de los grupos estratégicos desafiaban directamente el modelo de desarrollo subyacente y las relaciones

entre el gobierno y las empresas, se las calificaba de “contrarrevolucionarias” (Trujillo y Spronk 2018). El resultado fue una base dividida cuyo poder colectivo se vio disminuido, mientras que los movimientos sociales, las comunidades indígenas y los antiguos aliados se volvieron contra ellos mismos. Estos procesos de cooptación, división y paralelismo se evidenciaron, entre otros aspectos, con los casos de CONAMAQ, CIDOB, las organizaciones populares urbanas como la FEJUVE y la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) (Brown 2020a; Schilling-Vacaflor 2017; Morales 2013).

El referéndum de reelección, las elecciones impugnadas, el golpe de estado y la nueva era liderada por el MAS (2014-21)

En las elecciones presidenciales del 2014, Morales obtuvo el 61 por ciento de los votos. En la inauguración de su tercer mandato, Morales delineó un plan de desarrollo de 10 años, la Agenda Patriótica 2025. La Agenda esbozaba planes para continuar utilizando la extracción para financiar el desarrollo. Como indicó el vicepresidente García-Linera en agosto del 2016, “vamos a utilizar el extractivismo durante al menos dos décadas más” para desarrollar y proteger a la sociedad.

Además, sin “otro fuerte liderazgo nacional entre bastidores, la lógica del partido MAS sostenía que un cuarto mandato presidencial de Morales era fundamental para cumplir esta misión” (Achtenberg 2016: 374-5). Morales pretendía realizar un referéndum para modificar la Constitución con miras a permitir una tercera reelección. Se formó la coalición del “No” en torno a los políticos tradicionales de derecha. Asimismo, “ex-MASistas y representantes de los sectores populares de izquierda alienados que buscaban rehabilitar lo que percibían como un ‘proceso de cambio’ estancado, se constituyeron como el bloque del ‘No popular’” rechazando el proceso de referéndum (Ibíd.).

El referéndum fue derrotado por un estrecho margen de 51,3 por ciento, impidiendo así la posibilidad de reelección de Morales. Sin embargo, el MAS solicitó al Tribunal Constitucional la revocación de los límites a las autoridades electas que buscan la reelección, argumentando que violan los derechos humanos. El Tribunal Constitucional dictaminó que todos los funcionarios electos podían postularse para un cargo indefinidamente. El uso iliberal del poder presidencial para inmiscuirse en los asuntos judiciales junto con la decisión de la corte de permitir la reelección

movió a la acción a la oposición política dividida, al tiempo que deslegitimaba aún más a Morales ante los ojos de algunos antiguos aliados.

La derrota del referéndum reavivó la disputa sobre el significado de democracia con protestas de la oposición centradas en la defensa de normas liberales, tales como la alternancia de líderes, el pluralismo y el estado de derecho. Como afirma Mayorga (2020: 6), el MAS respondió a tales críticas a sus credenciales democráticas centrándose en los componentes participativos y sustantivos de la democracia, destacando que existe una equivalencia entre democracia y justicia.

En el período previo a las elecciones del 2019, luego del voto “no” en el referéndum del 2016 y la decisión judicial de permitir la candidatura de Morales, el bloque de oposición promovió la narrativa de que un MAS autoritario e iliberal haría cualquier cosa para mantenerse en el poder. Según las primeras encuestas, el principal rival de Morales era el expresidente Carlos Mesa. Para evitar una segunda vuelta se requería ganar una mayoría simple o más del 40 por ciento de los votos más un margen de victoria del 10 por ciento sobre el rival más cercano. Con casi el 84 por ciento de los votos contados, y con Morales a la cabeza con un 45,3 por ciento frente al 38,2 de Mesa, el sistema no oficial de conteo en línea (*trep*) detuvo la transmisión en vivo del conteo rápido de papeletas. Al día siguiente, luego de la solicitud de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la reanudación del *trep*, se presentaron los resultados actualizados que reflejaban el 95 por ciento de las actas. El margen de victoria de Morales superó por poco el 10 por ciento requerido para evitar una segunda vuelta. La OEA manifestó de inmediato su “profunda preocupación” por el “cambio de tendencia”, creando la impresión de que se había producido un fraude. Sin embargo, un informe realizado por los investigadores del Laboratorio de Ciencias y Datos Electorales del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) sugiere que “la victoria de Morales puede explicarse por su apoyo electoral antes de que se detuviera el conteo preliminar de votos... Encontramos que el resultado final puede explicarse por un patrón en el conteo de votos previo al corte del *trep*. Por lo tanto, no podemos encontrar evidencia cuantitativa de una tendencia irregular como afirma la OEA”. (Williams y Curiel 2020).

Tras el anuncio de la Corte Electoral de los resultados a favor de Morales, con la OEA arrojando dudas sobre su legitimidad y con los medios del bloque opositor avivando la creencia de que se había producido un fraude, estallaron protestas a gran escala en las zonas urbanas. Si bien al principio los manifestantes eran votantes de clase media enojados por el supuesto fraude, existía también la creencia entre las diversas clases sociales de que el gobierno usaría su autoridad de manera iliberal para permanecer en el poder. Los antiguos grupos aliados que se habían enfrentado a las tentativas de cooptación de los grupos indígenas de tierras bajas, los cultivadores de coca en los Yungas que sentían que Morales favorecía a los cocaleros de la organización central en el Chapare, los mineros cooperativos en Potosí, CONAMAQ y los sindicatos de trabajadores de fábricas en Cochabamba, entre otros, inicialmente rechazaron los resultados electorales y, luego, exigieron la renuncia de Morales (Schneider 2019).

Mientras continuaban las protestas de la clase media y algunas antiguas organizaciones populares estratégicamente aliadas, fueron los elementos conservadores de la extrema derecha del bloque de la oposición los que eventualmente capturaron el momento. Desde abril del 2019, Luis Camacho había tomado el control del Comité Cívico de Santa Cruz y se había opuesto vehementemente a la reelección de Morales. Camacho entró en contacto con el presidente del Comité Cívico de Potosí (Comico) encabezado por Marco Pumari. Comico, representando los intereses de la sociedad civil urbana de la ciudad, se había estado movilizándose contra el gobierno de Morales desde el 2016, exigiendo que el estado central le diera al departamento un mayor porcentaje de los ingresos obtenidos de la extracción de litio en la región. Los poderosos mineros de Potosí rechazaron abiertamente a Morales. Esto fue crucial porque los mineros tenían una gran influencia en la poderosa Central Obrera Boliviana (COB). Juan Carlos Huarachi, Secretario Ejecutivo de la COB, hizo un llamado a Morales para “reflexionar” sobre su postura. La posición de Morales se vio muy debilitada con el retiro del apoyo de la COB.

Con Camacho y los grupos racistas aliados incitando a la violencia y protestando continuamente en todo el país, Camacho exhortó a la policía para que “se pusiera del lado de la

gente”. Lo que siguió a continuación fueron motines policiales en Cochabamba, Santa Cruz y Sucre, mientras que, en La Paz, la policía se unió a los manifestantes. El general Williams Kaliman “sugirió” que Morales se hiciera a un lado. Con la pérdida del poder militar, con los poderes ideológicos (los líderes eclesiásticos, la OEA y los medios de comunicación tradicionales y sociales) alineados en su contra, con el rechazo del apoyo de los gremios empresariales, con el resurgimiento de la oposición política y con una base popular dividida y reacia a participar en una movilización masiva de defensa, Morales y los representantes del MAS fueron obligados a dejar sus cargos.

Luego de la destitución de Morales, Jeanine Añez, segunda vicepresidenta del Senado (y también expresentadora de televisión y crítica de larga data de Morales proveniente de la media luna), fue declarada, con biblia en mano, presidenta interina. Luego de su nombramiento, recibió el respaldo inmediato de importantes organizaciones empresariales que manifestaron su apoyo al “retorno a la democracia” (Wolff 2020). El papel constitucional del gobierno interino era convocar nuevas elecciones. Sin embargo, reconoció al líder derechista Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, acosó a los líderes del MAS e intimidó a sus simpatizantes, detuvo arbitrariamente a los detractores declarados del gobierno golpista, cerró los medios de comunicación críticos y arrestó a los periodistas, llamó “animales” a los miembros del MAS y desplegó las fuerzas armadas para reprimir las protestas indígenas antigolpistas en Sacaba y Senkata matando al menos veintidós personas e hiriendo a cientos de manifestantes (IHRC; Achtenberg 2020).

Con el gobierno interino posponiendo las elecciones, las agrupaciones indígenas y campesinas del Pacto de Unidad comenzaron a organizar sus bases, primero para exigir nuevas elecciones y luego para votar por la fórmula presidencial y vicepresidencial del MAS de Luis Arce y David Choquehuanca. La COB, cuyo líder Juan Carlos Huarachi había sugerido que Morales se hiciera a un lado para pacificar el país, se disculpó por no haber defendido al presidente y le dio un ultimátum al gobierno interino: nuevas elecciones o “convulsión social”. Si bien habían habido

tensiones entre el MAS y los sectores de su base constituyente durante el período 2018-19, así como tensiones dentro de las organizaciones populares, las acciones del gobierno interino proporcionaron un enemigo común que sirvió de estímulo para reunificar a las organizaciones divididas.

Cuando finalmente se llevaron a cabo las elecciones en octubre de 2020, la formula del MAS de Arce y Choquehuanca obtuvo más del 55 por ciento de los votos, Carlos Mesa ganó el 28,5 y Fernando Camacho solo el 14. En las primeras elecciones, sin Morales y sin los poderes estatales que los críticos habían largamente acusado de abusar para garantizar su estadía en el poder, el partido derrotó fácilmente a los candidatos de la oposición. Además, los candidatos del MAS ganaron más participación de votos a nivel nacional que la que logró Morales en las elecciones de 2019, al ganar en 6 de los 9 departamentos. El MAS también obtuvo la mayoría en ambas cámaras de la legislatura, aunque no consiguió la mayoría de dos tercios como fue el caso en las elecciones de 2014. Los resultados disiparon cualquier noción de que el MAS era simplemente un partido cuyo éxito dependía de Morales. De hecho, mostró que si bien la candidatura de Morales podía haber sido inaceptable para algunos votantes, el MAS y el modelo post-neoliberal que defendía mantuvieron su legitimidad. Sin embargo, es importante destacar que parte del éxito del MAS en el 2020 se basó en su condición de único partido capaz de competir a nivel nacional y derrotar a los partidos de oposición racistas y pro-neoliberales. Las tensiones entre el MAS y las organizaciones constituyentes que habían estado latentes bajo las presidencias de Morales, aunque se habían dejado de lado para enfrentar a un enemigo común, no habían desaparecido. Por ejemplo, las elecciones locales de marzo de 2021 fueron testigos de nuevas tensiones entre el MAS y los nuevos partidos populares que recibieron el respaldo de antiguas organizaciones estratégicamente aliadas. Los nuevos partidos y sus bases exigieron que el MAS pusiera fin a sus esfuerzos por controlar la movilización popular contestataria a través de prácticas cooptivas y del apoyo a organizaciones paralelas.

Populismo y democracia, las enseñanzas de Bolivia

El surgimiento del “outsider” populista Evo Morales al frente del MAS fue el resultado directo de una crisis de representación de los sectores populares. Un modelo de democracia de mercado excluyente que antepuso los intereses de las élites caucásicas en la política, marginando las voces populares indígenas de las formulaciones políticas. El aumento de la exclusión socioeconómica desencadenó un movimiento defensivo polanyiano por parte de la sociedad. Un sinnúmero de grupos como los cocaleros, los trabajadores urbanos, los grupos indígenas de tierras bajas y los grupos de mujeres, entre otros, enfrentaron una doble exclusión política y socioeconómica bajo el modelo de democracia de mercado permeado de neoliberalismo. Aunque cada grupo tenía demandas específicas, Morales supo englobar con éxito sus problemas bajo una bandera común de antineoliberalismo y exhortó a las organizaciones a unirse en la protesta social y electoral contra la democracia de mercado. El mecanismo de marco populista de Morales y las tácticas duales de protesta callejera/electoral desafiaron directamente el statu quo exigiendo la reconstrucción del orden social mediante el cual el estado actuaría como garante del bienestar social (con la sociedad ahora ampliada para incorporar a los sectores populares en lugar de solo una élite caucásica). Así surgieron dos bloques sociales distintos: un bloque popular que respaldaba el proyecto de Morales y un bloque liderado por una élite vinculada con el capital estadounidense que se había beneficiado durante la era neoliberal.

El populismo entendido como un movimiento defensivo desafiante del statu quo excluyente y deslegitimado propiciaría la oposición. Como se destaca en el proceso boliviano, los procesos de democratización implicarían inherentemente tensiones y rechazo por parte de aquellos que habían disfrutado durante mucho tiempo de un estatus dominante. A medida que estas luchas avanzaban, crecía la probabilidad de que se produjeran episodios de democratización y desdemocratización (simultáneas); las normas liberales podían torcerse para desviar a la oposición hacia un proyecto basado en promesas de profundizar la participación y de ampliar los derechos sustantivos de ciudadanía a los sectores anteriormente excluidos. De hecho, hay “muchas razones para asumir que los ejecutivos electos que aspiraban a ampliar la inclusión democrática sustantiva podrían chocar con las élites que preferían las restricciones de la democracia sobre el poder absoluto más que su

promesa de empoderar a la mayoría” (Slater, 2013: 732-3). En efecto, como señala Cameron (2021: 786), “sin negar los efectos potencialmente nocivos del populismo en la democracia, el enfoque está parcialmente fuera de lugar porque los modos oligárquicos de gobierno y la movilización populista son co-integrantes... El populismo es una reacción típica a los modos oligárquicos de gobierno y una característica endémica de la política democrática en sociedades desiguales”.

Comprender estas luchas de poder, entre los populistas antineoliberales elegidos para reaccionar contra la dominación oligárquica de la democracia y las élites que pretendían defender su dominación sobre el sistema político, requiere que los teóricos vayan más allá de una limitada evaluación institucionalista de los proyectos dirigidos por populistas. El único enfoque de análisis no debería ser solo el "populista iliberal" o el "autoritario competitivo", sino también en cómo los “outsiders” antineoliberales interactúan con la oposición oligárquica. Como lo demuestra el caso boliviano, para comprender las acciones de los gobiernos antineoliberales recién elegidos, incluyendo la disposición de participar en conductas antiliberales, y para comprender el apoyo o el rechazo del sector popular a las acciones gubernamentales, es esencial ver el proceso post-neoliberal a través de un lente histórico que encapsule la era de la democracia de mercado. Al entender quiénes fueron incorporados y quiénes fueron excluidos bajo la democracia de mercado (inclusión política y socioeconómica de la clase media y de las élites, exclusión de los sectores populares e indígenas), así como el anterior dominio de fuentes ideológicas, económicas, militares y políticas de poder por parte de un bloque selecto de élite, podremos comprender mejor por qué los gobiernos pueden torcer las normas liberales y por qué conservan el respaldo popular para hacerlo. Es decir, “medir” el impacto de los proyectos populistas dirigidos por “outsiders” en calidad democrática solo puede tener sentido si analizamos el statu quo anterior que desencadenó la respuesta populista en primer lugar.

Además de resaltar las tensiones potenciales entre la democracia liberal y la radical-sustantiva, el caso boliviano pone de manifiesto cómo los proyectos populistas que unifican a múltiples grupos bajo un mecanismo de marco común (por ejemplo, la democracia antineoliberal)

pueden generar tensiones internas en el bloque popular, o el *pueblo*. Si bien un marco amplio es esencial para obtener el respaldo electoral (y de la calle) de múltiples grupos, especialmente cuando el populista es un candidato “outsider” que carece de una estructura de partido institucionalizada, con el tiempo las demandas de grupos específicos pueden convertirse en una fuente de tensión en la base del partido. Asimismo, dado que el proyecto populista desafiante del statu quo debe funcionar dentro de los límites establecidos por las mismas élites cuyos intereses se cuestionan, es inevitable que un proyecto populista no cumpla con todas las promesas preelectorales para todos los grupos. Por ejemplo, cuando el proyecto liderado por Morales enfrentó los límites establecidos por la dependencia preestablecida a la exportación de materias primas, el MAS chocó con los sectores del bloque popular, lo que generó problemas de cooptación y paralelismo. Por lo tanto, comprender completamente los impactos de los procesos liderados por populistas en calidad democrática implica, en primer lugar, ampliar nuestra conceptualización de democracia de una limitada perspectiva liberal a una que incorpore criterios liberales, participativos y sustantivos, y en segundo lugar, es necesario evaluar la naturaleza y evolución de las relaciones partido-base.

Finalmente, si bien los proyectos populistas pueden ser modas pasajeras, breves momentos de ira, que pronto se disipan, cuando el populista “outsider” no logra cumplir sus promesas una vez en el cargo, este no es necesariamente el caso. El proyecto post-neoliberal en Bolivia demostró que se puede lograr un modelo más sustantivo de democracia y ciudadanía cuando un “outsider” populista gana las elecciones. A pesar de todas las fricciones y la moderación del proyecto frente a los poderes del bloque opositor, el modelo post-neoliberal de democracia esbozado en la Constitución conserva altos niveles de legitimidad. Durante el periodo de enfrentamiento contra el gobierno golpista (2019-20) se reestablecieron los espacios de participación, tales como el Pacto de Unidad el cual reunió a los líderes de las principales organizaciones populares para guiar al MAS desde abajo, y el candidato del MAS ganó fácilmente las elecciones presidenciales con un mandato de profundizar y avanzar en el proyecto post-neoliberal. Existe un bloque popular organizado altamente politizado e influyente que ha visto tanto las posibilidades como los peligros de un populista progresista en el poder. El momento populista de Bolivia ha alterado el statu quo de

manera irrevocable y un regreso generalizado a la democracia de mercado excluyente está, hoy en día, fuera de discusión.

Referencias:

- Achtenberg, Emily 2016 “Evo’s Bolivia at a political crossroads: Taking stock of Bolivia’s changing political environment after Evo Morales’ 2016 Referendum Defeat,” *NACLA Report on the Americas* Vol. 48, N° 4.
- Achtenberg, Emily 2020 “MAS party under threat as Bolivia moves towards new elections (without Evo),” en *NACLA Rebel Currents* <<https://nacla.org/blog/2020/01/10/mas-party-under-threat-bolivia-new-elections-without-evo>> acceso 3 de marzo 2022.
- Albro, Robert 2005 “The water is ours, ¡Carajo!: Deep citizenship in Bolivia’s Water War,” en Nash, June (comp.), *Social Movements: An Anthropological Reader* (Oxford: Basil Blackwell).
- Anria, Santiago 2013 “Social movements, party organization, and populism: Insights from the Bolivian MAS,” *Latin American Politics and Society* Vol. 55, N° 3.
- Arce Catacora, Luis 2015 *Modelo Económico Social Comunitario Productivo Bolivian* (La Paz: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas).
- Arditi, Benjamín 2005 “Populism as an internal periphery of democratic politics,” en Panizza, Francisco (comp.) *Populism and the Mirror of Democracy* (London/NY: Verso).
- Arteaga, Walter 2015 “Building citizenship in the context of the debate on the post-2015 agenda in Bolivia,” *Community Development Journal* Vol. 50, N° 4.
- Arze, Carlos 2016 *Una década de gobierno. ¿Construyente el Vivir Bien o un capitalismo salvaje* (La Paz: CEDLA).
- Berman, Sheri 2017 “The pipe dream of undemocratic liberalism,” *Journal of Democracy* Vol. 28, N° 3.

- Brown, John 2022 *Deepening democracy in post-neoliberal Bolivia and Venezuela: Advances and setbacks* (Abingdon and New York: Routledge).
- Brown, John 2020 “Neoliberalization, de-democratization, and populist responses in Western Europe, the US, and Latin America,” *Critical Sociology* Vol. 46, N° 7-8.
- Brown, J 2020a “Party-base linkages and contestatory mobilization in Bolivia’s El Alto: Subduing the Ciudad Rebelde,” *Latin American Perspectives* Vol. 47, N° 4.
- Cameron, Maxwell 2021 “The return of oligarchy? Threats to representative democracy in Latin America,” *Third World Quarterly* Vol. 42, N° 4.
- Castañeda, Jorge 2006 “Latin America’s left turn,” *Foreign Affairs* Vol. 65, N° 3.
- de la Torre, Carlos 2016 “Left-wing populism: Inclusion and authoritarianism in Venezuela, Bolivia, and Ecuador,” *Brown Journal of World Affairs* Vol. 23.
- Dunn, John 2019 “The challenge of populism: Why populist politics spreads in the world,” *Populism* Vol. 2, N° 1.
- CEPAL 2013 *Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean* (Santiago, Chile: United Nations).
- Ellner, Steve 2013 “Latin America’s radical left in Power: Complexities and challenges in the twenty-first century,” *Latin American Perspectives* Vol. 40, N° 3.
- Fontana, Lorenza Belinda 2013 “On the perils and potentialities of revolution: Conflict and collective action in contemporary Bolivia,” *Latin American Perspectives* Vol. 40, N° 3.
- Gustafson, Bret 2020 *Bolivia in the Age of Gas* (Durham, NC: Duke University Press).
- IHRC and University Network for Human Rights 2019 “They Shot us like animals: Black November and Bolivia’s interim government,” en <https://www.humanrightsnetwork.org/bolivia> acceso 3 de marzo 2022.
- Johnson, Jake and Lefebvre, Stephan 2014 “Bolivia’s Economy under Evo in 10 graphs,” *CEPR* en <https://cepr.net/bolivias-economy-under-evo-in-10-graphs/> acceso 3 de marzo 2022.

- Kaup, Brent 2010 “A neoliberal nationalization? The constraints on natural-gas-led development in Bolivia,” *Latin American Perspectives* Vol. 37, N° 3.
- Kaup, Brent 2013 “Transnational class formation and spatialities of power: The case of elite competition in Bolivia,” *Global Networks* Vol. 13, N° 1.
- Laclau, Ernesto 2005 *On populist reason* (London/NY: Verso).
- Lazar, Sian 2008 *El Alto, Rebel City: Self and citizenship in Andean Bolivia* (Durham and London: Duke University Press).
- Mair, Peter 2013 *Ruling the void: The hollowing of Western Democracy* (New York, NY: Verso).
- Mayorga, Fernando 2020 “El MAS-IPSP ante un nuevo contexto político: De ‘partido de gobierno’ a ‘instrumento político’ de las organizaciones populares,” en Souverein, Jan and Rodríguez, José Luis Exeni (comps.), *Nuevo Mapa de Actores en Bolivia* (La Paz: FES).
- Morales, Waltraud 2013 “The TIPNIS crisis and the meaning of Bolivian democracy under Evo Morales,” *The Latin Americanist* Vol. 57, N° 1.
- Munck, Gerardo 2015 “Building democracy... which democracy? Ideology and models of democracy in post-transition Latin America,” *Government and Opposition* Vol. 50, N° 3.
- Paz, María and Ramírez-Cendrero, Juan M 2021 “Extractivism and resource nationalism in Bolivia: Foreign direct investment policy and development under Evo Morales” en Ellner, Steve (comp.) *Latin American Extractivism: Dependency, Resource Nationalism, and Resistance in Broad Perspective* (Lanham, MD: Rowman and Littlefield).
- Polanyi, Karl 1944 *The great transformation: The political and economic origins of our time* (New York: Farrar and Rinehart).
- Roberts, Kenneth 2015 *Changing course: Party systems in Latin America’s neoliberal era* (New York: Cambridge University Press).
- Roberts, Kenneth 2019 “Bipolar disorders: Varieties of capitalism and populist outflanking on the left and right,” *Polity* Vol. 54, N° 4.

- Rossi, Federico and Silva, Eduardo 2018 “Introduction: reshaping the political arena,” en Silva, Eduardo and Rossi, Federico (comps.) *Reshaping the Political Arena in Latin America: From Resisting Neoliberalism to the Second Incorporation* (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press).
- Sánchez-Sibony, Omar 2021 "Competitive authoritarianism in Morales's Bolivia: Skewing arenas of competition," *Latin American Politics and Society* Vol. 63, N° 1.
- Schilling-Vacaflor, Almut 2017 “‘If the company belongs to you, how can you be against it?’ Limiting participation and taming dissent in neo-extractivist Bolivia,” *The Journal of Peasant Studies* Vol. 44, N° 3.
- Schmitter, Philippe 2019 “‘Real-existing’ democracy and its discontents: Sources, conditions, causes, symptoms, and prospects,” *Chinese Political Science Review* Vol. 4, N° 2.
- Schneider, Alejandro 2019 “Algunos elementos para comprender el golpe de estado en Bolivia,” *CEDLA Blog* en <<https://cedla.org/cedla-en-los-medios/47243/>> acceso 3 de marzo 2022.
- Silva, Eduardo 2009 *Challenging neoliberalism in Latin America* (New York: Cambridge University Press).
- Slater, Dan 2013 “Democratic careening,” *World Politics* Vol. 65, N° 4.
- Tapia, Luis 2011 *El Estado de derecho como tiranía* (La Paz: CIDES-UMSA).
- Trujillo, Jorge and Spronk, Susan 2018 "Socialism without workers? Trade unions and the new left in Bolivia and Ecuador," en Silva, Eduardo and Rossi, Federico (comps.), *Reshaping the Political Arena in Latin America: From Resisting Neoliberalism to the Second Incorporation* (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press).
- Webber, Jeffrey 2010 “Carlos Mesa, Evo Morales, and a divided Bolivia (2003—2005),” *Latin American Perspectives* Vol. 37, N° 3.
- Weyland, Kurt 2013 “Latin America's authoritarian drift: The threat from the populist left,” *Journal of Democracy* Vol. 24, N° 3.

- Williams, Jack and Curiel, John 2020 “Analysis of the 2019 Bolivia election,” *CEPR* en <https://cepr.net/report/analysis-of-the-2019-bolivia-election/> acceso 3 de marzo 2022.
- Wolff, Jonas 2019 “The political economy of Bolivia’s post-neoliberalism: Policies, elites and the MAS government,” *European Review of Latin American and Caribbean Studies* Vol. 108.
- Wolff, Jonas 2020 “Las élites económicas en la Bolivia contemporánea,” en Souverein, Jan and Rodríguez, José Luis Exeni (comps.), *Nuevo Mapa de Actores en Bolivia* (La Paz: FES).
- Zuazo, Moira 2010 “¿Los movimientos sociales en el poder?” *Nueva Sociedad* Vol. 227.